



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

JUZGADO SEGUNDO (02) ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE CALI
SR. JUEZ DR. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA MADRID
E. S. D.

REFERENCIA: REPARACIÓN DIRECTA
RADICACIÓN: 76001-33-33-002-2022-00171-00
DEMANDANTE: JAIME GOMEZ ERAZO Y OTROS
DEMANDADO: DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI

ASUNTO: CONTESTACIÓN DEMANDA

DIEGO FERNANDO PAZ LENIS, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.931.736 de Cali, abogado titulado con tarjeta profesional No. 154257 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en calidad de apoderado del Distrito Especial de Santiago de Cali, conforme al poder que adjunto al proceso, de manera atenta descorro el traslado para contestar en oportunidad la demanda promovida dentro del medio de control de la referencia que se interpuso contra el Distrito Especial de Santiago de Cali.

A LOS HECHOS U OMISIONES DEL MEDIO DE CONTROL

AL HECHO SEÑALADO COMO 2.1: No me consta, son aseveraciones que deberán acreditarse plenamente por la parte demandante conforme lo señala el artículo 167 del C.G.P, aplicable por remisión expresa del artículo 211 del C.P.A.C.A. y corroborarse por el Despacho en el momento procesal oportuno.

AL HECHO SEÑALDO COMO 2.2: No me consta, son aseveraciones que deberán acreditarse plenamente por la parte demandante, conforme lo señala el artículo 167 del C.G.P, aplicable por remisión expresa del artículo 211 del C.P.A.C.A. y corroborarse por el Despacho en el momento procesal oportuno.

AL HECHO SEÑALDO COMO 2.3: No me consta, son aseveraciones que deberán acreditarse plenamente por la parte demandante, conforme lo señala el artículo 167 del C.G.P, aplicable por remisión expresa del artículo 211 del C.P.A.C.A. y corroborarse por el Despacho en el momento procesal oportuno.

AL HECHO SEÑALDO COMO 2.4: No me consta, son aseveraciones que deberán acreditarse plenamente por la parte demandante, conforme lo señala el artículo 167 del C.G.P, aplicable por remisión expresa del artículo 211 del C.P.A.C.A. y corroborarse por el Despacho en el momento procesal oportuno.

A LOS HECHOS SEÑALDOS COMO: 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 Y 2.9: Son tomados literalmente de la Historia Clínica aportada. Sin embargo, no me constan las circunstancias de tiempo, modo o lugar del referido accidente de tránsito, lo anterior, debido a que no se fue testigo de este y tales circunstancias se desconocen.

AL HECHO SEÑALDO COMO 2.10: No me consta, son aseveraciones que deberán acreditarse plenamente por la parte demandante, conforme lo señala el artículo 167 del



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

C.G.P, aplicable por remisión expresa del artículo 211 del C.P.A.C.A. y corroborarse por el Despacho en el momento procesal oportuno.

A LAS DECLARACIONES Y CONDENAS DEL MEDIO DE CONTROL

El Distrito Especial de Santiago de Cali no es responsable de resarcir los perjuicios solicitados por el Señor Jaime Gómez Erazo y Otros.

Que el material probatorio no es suficiente ni determinante en las circunstancias de tiempo, modo y lugar de como ocurrió lo aseverado como fundamento para lo solicitado.

Por tal razón, me opongo a todas y cada una de las pretensiones de la parte actora, porque como quedará demostrado en el discurrir del proceso, no está acreditada la falla del servicio ni existe relación de causalidad directa, inmediata y exclusiva entre el hecho y el daño que es imputado al Distrito Especial de Santiago de Cali.

- A los Perjuicios Inmateriales

Morales:

Objeto y me opongo a que se emita condena por concepto de perjuicios morales por el monto de 400 S.M.L.M.V que solicita la parte actora en su demanda esta objeción se presenta considerando la inexistencia de pruebas de una responsabilidad atribuible al DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, de los perjuicios reclamados y por ende una falta de acreditación de estos.

El Consejo de Estado en sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 31172, M.P. Olga Mélida Valle de de la Hoz, estableció entre otras cosas que:

(...) “El precio del dolor está llamado a establecerse por - Arbitrium Judicis fundado en las pruebas que reposen en el plenario, en ese orden de ideas, si la prueba plena del perjuicio no obra, difícilmente la sana crítica y las reglas de la experiencia de las que se vale legítimamente el operador judicial podrán permitirle establecer vía compensación una afectación a un bien personalísimo, mucho menos tendrá algo por tasar o establecer” (...)

Así mismo es de señalar que estos han sido tasados en forma excesiva, siendo llevados al límite de 100 S.M.L.M.V para cada uno de los demandantes, desconociéndose la gravedad misma de la lesión o hasta su existencia.

Daño a la salud:

Objeto y me opongo a que se emita condena por concepto de un daño a la salud por el monto de 100 S.M.L.M.V que solicita la parte actora en su demanda esta objeción se presenta considerando la inexistencia de pruebas de una responsabilidad atribuible al DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, de los perjuicios reclamados y por ende una falta de acreditación de estos.

En el presente caso no se acreditan secuelas físicas o psíquicas de carácter permanente o transitorias que constituyan una alteración del estado de salud del demandante, puesto que la Historia Clínica que ha sido aportada no las establece, de tal manera que, si estas no se acreditan, no deberán reconocerse.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

- A los Perjuicios Materiales

Lucro cesante Consolidado y Futuro:

Objeto y me opongo a que se emita condena por estos conceptos.

En lo que respecta al Lucro Cesante pretendido. No se allegó ningún material probatorio que acredite, entiéndase, extractos bancarios, certificados de cobro de incapacidades, certificado de aportes al Sistema Integral de la Seguridad Social que den cuenta de su I.B.C para la fecha de ocurrencia de los hechos relatados en la demanda.

En fundamento a lo anterior, el Consejo de Estado en Sala Plena de la Sección Tercera, Sentencia de Unificación con fecha del 18 de julio de 2019, Magistrado Ponente Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera (exp. 44572), precisó que:

(...) “En lo que atañe a la liquidación del lucro cesante futuro, es preciso eliminar la presunción según la cual toda persona en edad productiva percibe al menos un salario mínimo, en tanto contraría uno de los elementos fundamentales del daño, esto es, la certeza o certidumbre misma” (...)

Lo anterior, en tanto que, para dicha Corporación, se puede incurrir, al no dudar de su existencia, en el desatino de indemnizar un perjuicio inexistente, incierto o eventual. En este tenor lo señaló el fallo del Consejo:

(...) “2. Presupuestos para acceder al reconocimiento del lucro cesante:

2.1.2 Todo daño y perjuicio que el demandante pida que se le indemnice por concepto de lucro cesante debe ser objeto de prueba suficiente que lo acredite o, de lo contrario, no puede haber reconocimiento alguno (artículos 177 del C. de P. C. y 167 del C.G.P.).

2.2.2 Ingreso base de liquidación

El ingreso de los independientes debe quedar también suficientemente acreditado y para ello es necesario que hayan aportado, por ejemplo, los libros contables que debe llevar y registrar el comerciante y que den cuenta de los ingresos percibidos por su actividad comercial o remitir, por parte de quienes estén obligados a expedirlas, las facturas de venta, las cuales tendrán valor probatorio siempre que satisfagan los requisitos previstos en el Estatuto Tributario, o que se haya allegado cualquier otra prueba idónea para acreditar tal ingreso”(...)

También es de manifestar que la ausencia de un porcentaje de pérdida de capacidad laboral no permite tenerse como acreditado una incapacidad y/o invalidez física o psíquica que pueda limitar la vida laboral del demandante en una determinada proporción. En efecto, el Consejo de Estado en sentencia de unificación del 18 de julio de 2019, Radicación número: 73001-23-31-000-2009-00133-01(44572), con ponencia del Consejero CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA, ha señalado que el lucro cesante se define como:

“la ganancia frustrada o el provecho económico que deja de reportarse y que, de no producirse el daño, habría ingresado ya o en el futuro al patrimonio de la víctima”; por tanto, las ganancias o provechos económicos que puede percibir por este concepto la actora, en este caso, en modo alguno se ven frustradas, pues no se encuentra calificada con algún porcentaje de pérdida de la capacidad laboral por el respectivo organismo o personal especializados”.

Así, la misma Corporación, en sentencia del 28 de abril de 2021, Radicación número: 27001-23-31-000-2010-00225-01(45905), con ponencia del Consejero MARTIN



BERMUDEZ MUÑOZ, ha concluido que:

“el criterio jurisprudencial para la liquidación del lucro cesante es aquel según el cual se reconoce el porcentaje de pérdida de capacidad laboral sobre el salario devengado hasta la vida probable del lesionado”. Como quiera entonces que el lucro cesante, en caso de lesiones, está definido por la disminución de pérdida de capacidad laboral, y por consiguiente, ésta es determinante para establecer el monto del perjuicio material en la modalidad de lucro cesante, no puede establecerse entonces indemnización alguna por dicho concepto”.

Aunado a lo anterior, no se aportó al expediente ninguna prueba que permitiera inferir ingresos devengados luego de conformidad con el ordenamiento jurídico de ninguna manera se debe acceder a dichos perjuicios, pues el mismo no se encuentra sustentado.

Para este caso en concreto, respecto a los perjuicios materiales solicitados por la parte accionante, debe indicarse que el mismo no se encuentra debidamente acreditado, pues no hay medios probatorios allegados, salvo el decir de la parte demandante.

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y RAZONES DE DEFENSA

Es de precisar que el I.P.A.T 001398732 da cuenta de ser levantado a las 22:30, más de dos horas después de ocurrencia del presunto accidente según lo aseverado por la parte demandante, *“tuvo lugar a las 20:00 horas”*.

Así mismo se registró en el I.P.A.T que la vía se encontraba seca y con buena iluminación, cuestión que permite avizorar una distracción o impericia del demandante lo cual se erige como una causa eficiente del accidente de tránsito.

No es cierto que en el IPAT se hubiere indicado que la causa del accidente de tránsito fue por un hueco en la vía, al respecto, es importante destacar que el agente de tránsito ni siquiera tiene tal facultad, pues es al Juez a quien le corresponde determinarla, adicionalmente, se destaca que en dicho informe también se consigna la hipótesis: 157 conocida como: “Otra” que esta dentro de las HIPÓTESIS ATRIBUIBLES AL CONDUCTOR EN GENERAL. Lo que sucedió es que únicamente se da desarrollo a la hipótesis: 306, la cual se ha delimitado con fines netamente estadísticos, sin que ello implique un juicio sobre la responsabilidad. Así es advertido en el capítulo V, campo 11, del “Manual para el Diligenciamiento del IPAT” adoptado por la Resolución No. 00111268 del 2012 del Ministerio de Transporte”. léase:

“En el levantamiento del accidente la autoridad de tránsito debe determinar obligatoriamente al menos una hipótesis. Sin embargo, si observa otras hipótesis que pudieron intervenir en el accidente de tránsito, tales como elementos, actuaciones o circunstancias, debe registrarlas según se trate del vehículo, la vía, del peatón, o del pasajero. Una vez terminadas: Las indagaciones y el análisis de los elementos materiales de prueba. Evidencia física. Determinación de ruta de los participantes. Punto y lugar de impacto. Análisis preliminar de la dinámica del accidente (antes, durante y después) de acuerdo con los impactos y posición final de los vehículos y las víctimas y demás elementos. Análisis de velocidades (en lo posible). Posible violación a las normas de tránsito.

Se debe estar en condiciones de determinar por lo menos una de las hipótesis del accidente, en aras de generar estadísticas que lleven a determinar cuál es el factor repetitivo que más incide en los accidentes, tramos o puntos de mayor accidentalidad, entre otros. (...)

La(s) hipótesis indicada(s) expresa(n) las acciones generadoras o intervinientes en la evolución física de un accidente, debidamente fundamentadas mediante la objetividad y el



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

análisis técnico-científico de los elementos materiales de prueba y evidencia física encontrada en el lugar de los hechos”.. Así las cosas, deberá tener de presente el despacho que las circunstancias fácticas del presunto accidente de tránsito no se encuentran plenamente acreditadas, pues se desconoce el contexto y las condiciones que lo rodearon.

Verbigracia a lo anterior es el hecho de que el respectivo Agente de Tránsito tuvo que corroborar a través de terceros las circunstancias que rodearon el accidente registrado en el I.P.A.T 001398732 desconociéndose circunstancias cruciales como: Estado de seguridad, en general del vehículo o de los frenos, de la dirección, de las luces, bocinas y llantas.

Lo que aparece un I.P.A.T sin el lleno de los requisitos contemplados en la Ley 769 de 2002 y en la resolución del Ministerio de Transporte número: 00111268 de 2012.

El artículo 144 y 149 de la ley 769 de 2002 indican los elementos básicos que debe tener un Informe Policial de Accidentes de Tránsito, entre otros:

“Estado de seguridad, en general, del vehículo o de los vehículos, de los frenos, de la dirección, de las luces, bocinas y llantas, relación de los medios de prueba aportados por las partes”

En lo que respecta al bosquejo topográfico o (Croquis) del I.P.A.T. Señala que el señor Gómez Erazo transitaba por el carril izquierdo de la Avenida Tercera Norte sentido Sur – Norte a la altura de la Calle 55 (Intersección Vial) y que se encontró con el presunto imperfecto a muy pocos metros al salir de la intersección vial del semáforo. De lo anterior se evidencia negligencia al transgredir la Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito Terrestre que reseña en su Artículo 94:

(...) Normas generales para bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y moto triciclos:

Los conductores de bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y moto triciclos, estarán sujetos a las siguientes normas: Deben transitar por la derecha de las vías a distancia no mayor de un (1) metro de la acera u orilla y nunca utilizar las vías exclusivas para servicio público colectivo (...)

También evidencia este Informe que el señor Gómez Erazo quien estando en presencia de la intersección vial de la Avenida Tercera Norte con Calle 55 sentido Sur – Norte de la vía, (Se anexa imagen que permite evidenciar la intersección y su semáforo) debió reducir de manera ostensible su velocidad a 30kms por hora o menos, como lo exige el Artículo 74 de la Ley 769 de 2002.

(...) “Reducción de velocidad: Los conductores deben reducir la velocidad a treinta (30) kilómetros por hora en los siguientes casos:

En lugares de concentración de personas y en zonas residenciales.

En las zonas escolares.

Cuando se reduzcan las condiciones de visibilidad.

Cuando las señales de tránsito así lo ordenen

En proximidad a una intersección” (...)



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA



De haber transitado a una velocidad permitida por la normatividad aplicable a la materia, muy seguramente habría podido maniobrar de manera preventiva al enfrentarse a cualquier tipo de obstáculo y/o irregularidad en la vía, lo cual a todas luces no ocurrió, más aún cuando en el informe antes mencionado se establece que la vía estaba seca y con buenas condiciones de visibilidad, traduciéndose todo lo anterior en una clara falta a lo enmarcado en el Artículo 74 y 94 de la Ley 769 de 2002. El exceso de velocidad también lo corrobora el mismo informe, en su hoja numero 3 correspondiente al croquis donde se grafica que el vehículo automotor (motocicleta) queda a varios metros de distancia de la presunta cavidad en la vía, lo que forzosamente nos indica que al paso por la intersección vial no se realizó la reducción de velocidad exigida por la norma anteriormente citada.

Si el conductor hubiese adoptado una conducta prudente y de cumplimiento de las normas del Código Nacional del Tránsito, es seguro que no se hubiese presentado el accidente o los daños hubiesen sido menores. La sana lógica nos deja pensar que el lesionado no tuvo el suficiente cuidado y la debida precaución al transitar por la vía el día del accidente, pues el llevar una velocidad adecuada le hubiera permitido evitar riesgos.

La falta de crédito sobre la falla del servicio y aún más la duda sobre si fue esa presunta falla la causante del daño, no permite configurar el nexo de causalidad que se exige para predicar responsabilidad de la Administración Distrital.

De igual manera, se pone de presente que las violaciones al deber objetivo de cuidado, fueron determinantes en el resultado objeto de esta indagación, son su legítimo nexo causal, el no conducir con la velocidad permitida impide que en un determinado momento se pueda sortear cualquier situación en el normal uso de la vía, **así mismo conducir por un carril proscrito de la vía**, propicio el accidente y evito que se dieran unas consecuencias menores, dado que la naturaleza misma del ejercicio de conducir implica esto, puesto que se está frente al dilema de velocidad y reacción, por lo tanto, es un acto de falta de cuidado y de incrementar su propio riesgo, por ende se supera el riesgo permitido, lo cual aparejó los resultados mencionados, consecuencia que no se puede trasladar a otras personas o entidades, sino que es de su propia responsabilidad; que, si hubiere sido fiel a los cánones que regulan esta actividad, no se hubiera presentado el accidente, consecuente con ello, se concluye que la falta al deber objetivo de cuidado se debe pregonar del conductor de la motocicleta.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Sobre la conducta y la previsión que le cabe asumir a los conductores de vehículos el Consejo de Estado se pronunció en los siguientes términos:

“Quien conduzca debe prever aún aquellos eventos derivados de la imprudencia o inobservancia de los demás, ello tiene su límite en la razonable probabilidad del peligro y por ello no puede pretenderse del conductor la previsión de la remota posibilidad; a él se le exige es una actitud síquica en la que prevea aquellos sucesos que se presentan con notorio grado de probabilidad, es decir, en lo que la ocurrencia del daño a un interés jurídico pueda ser evitada con su contribución activa; más allá de este límite su conducta se desplaza a lo fortuito o a la fuerza mayor” (Expediente No. 9722, diciembre 9 de 1996, Consejero Ponente, Juan de Dios Montes Hernández)

En este orden de ideas, carece de sustento lo afirmado por la parte demandante en cuanto señala que el hecho implica una falla del servicio por parte de la administración, lo cual le corresponde probar. Sobre este particular, considero pertinente hacer referencia a los planteamientos esbozados por el tratadista JUAN CARLOS HENAO, en su libro EL DAÑO, Universidad Externado de Colombia, primera edición, julio de 1.998, página. 38, cuando afirma:

“Sin embargo, en ocasiones a pesar de existir daño no procede declarar la responsabilidad. Esto por cuanto el daño es requisito indispensable pero no suficiente para que se declare la responsabilidad. En efecto, en algunos eventos no se declara la responsabilidad, a pesar de haber existido daño.

Es lo que ocurre en dos hipótesis: el daño existe, pero no se puede atribuir al demandado, como cuando aparece demostrada una de las causales exonerativas; o el daño existe y es imputable, pero el imputado no tiene el deber de repararlo, porque no es un daño antijurídico y debe ser soportado por quien lo sufre”.

Por eso valga repetirlo, se considera que el daño es un elemento indispensable para la existencia de la responsabilidad, pero cuya sola presencia no convierte, de suyo, a quien lo sufre en acreedor de una indemnización.

Si cotejamos la primera hipótesis de la tesis expuesta por el ilustre tratadista con el asunto que nos ocupa, llegamos a la siguiente conclusión: Si se corroborase la existencia del daño, este no es atribuible al demandado Distrito Especial de Santiago de Cali, por haber en este caso, una causal de exoneración, como es el hecho de la víctima, al desplazarse sobre una vía de alto tráfico vehicular, conduciendo una motocicleta, sobrepasando los límites de velocidad permitido, y por un carril proscrito, evento en el cual se rompe el nexo de causalidad que debe existir entre la falla y el daño para que se configure la responsabilidad de la entidad demandada.

La causa del siniestro no puede situarse aisladamente por lo que describe el demandante como un hueco que lo sorprende en la vía, haciéndolo perder el control, la conducta de operar o conducir vehículos es integral y comprende los momentos precedentes, de tal manera que los movimientos automáticos que realiza el conductor (acelerar, cambiar las velocidades, disminuir la aceleración o frenar) están dentro de la acción global de conducir, que en su conjunto pueden valorarse como voluntarios, de allí que se pueda inferir si fueran correctos o imprudentes, sin duda a una menor aceleración le habría permitido sortear con éxito el obstáculo supuestamente irresistible e imprevisible, evitando así el suceso. Imprudencia que en últimas se convierte en la determinante del accidente y sus resultados lesivos.

Se itera que la actividad desarrollada por el actor ha sido catalogada por la jurisprudencia como de alto riesgo y peligrosa. Así las cosas, al Señor Jaime Gómez Erazo, le correspondía realizar la actividad de conducción de la motocicleta acatando las disposiciones del Código Nacional de Tránsito, como está dispuesto en su *Artículo 55*:



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

“Toda persona que tome parte en el tránsito, como conductor o como peatón, debe comportarse en forma que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a los demás, debe conocer, cumplir las normas y señales de tránsito que le sean aplicables, así como obedecer las indicaciones que le den las autoridades de tránsito”

En este caso, el resultado dañoso se produce como resultado del hecho de la víctima que rompe el nexo causal que la parte actora le endilga a la presunta falla, pues sin lugar a duda, la causa eficiente del resultado no es más que el actuar imprudente o culposo de ésta, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeto como se manifestó.

En el presente caso, de acuerdo con lo expuesto, le correspondía a la parte actora demostrar mediante el aporte de los medios probatorios idóneos la responsabilidad que se pretende imputar a la demandada, medios que permitieran deducir el nexo de causalidad entre el daño sufrido por el actor debido al presunto accidente de tránsito y la deprecada falta de mantenimiento adecuado de las vías públicas.

Por tal motivo me permito solicitar que se reconozca: La INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD POR CARENCIA DE NEXO CAUSAL QUE COMPROMETA AL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI CON LOS PRESUNTOS PERJUICIOS RECIBIDOS POR LA PARTE ACTORA. O en su defecto que dentro del presente caso se establezca como determinante el HECHO DE LA VICTIMA.

**PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS DEMAS PRUEBAS APORTADAS Y
SOLICITADAS POR LA PARTE DEMANDANTE**

Respecto a las Imágenes aportadas como prueba por la parte demandante me opongo, manifestando que se allego un material en imágenes en el que se registra un daño en la capa asfáltica de una vía. Y sobre este material es preciso decir que, de este no es posible establecer la relación entre el medio probatorio y el hecho que se pretende probar, no existe forma de establecer la época de las imágenes, o que correspondan al "estado de la vía pública" ni atarlas a las secuelas físicas reclamadas.

Se ha pronunciado el Consejo de Estado, indicando que:

"Sobre las imágenes en fotografías y video cabe decir, como lo ha explicado la Sala en otras oportunidades (1) , que son en este caso documentos privados representativos, por no acreditarse que las tomó un funcionario público, en ejercicio de su cargo o con su intervención (CPC, art. 251). La doctrina se ha pronunciado sobre el valor probatorio de este tipo de documento representativo; dice que las fotografías de personas, cosas, predios, etc, sirve para probar el estado de hecho que existía en el momento de ser tomadas, de acuerdo con la libre crítica que de ellas haga el juez; que son un valioso auxiliar de la prueba testimonial, cuando el testigo reconoce en la fotografía a la persona de la cual habla o el lugar o la cosa que dice haber conocido (2) . Si bien para cuando se aportaron esas fotografías regía el artículo 25 del Decreto-Ley 2.651 de 1991, lo cierto es que por sí sola la presunción de autenticidad de las fotografías no permite definir la situación temporal de ocurrencia del suceso, que representan, pues la ley procesal civil enseña, en el artículo 280, que la fecha cierta de los documentos privados solo se deduce respecto de terceros "desde el fallecimiento de alguno de los que lo han firmado, o desde el día en que ha sido inscrito en un registro público o en que conste haberse aportado en un proceso, o en que haya tomado razón de él un funcionario competente en su carácter de tal, o desde que haya ocurrido otro hecho que le permita al juez adquirir certeza de su existencia" (negrilla por fuera del texto original). En consecuencia las fotografías privadas, allegadas con la demanda, no se tendrán en cuenta, a pesar de que en la demanda se aduzca que corresponden al sitio en el que pareció ahogado el menor, debido a que la fecha cierta, por ser documento privado, se entiende solo a partir de una de las situaciones que fija la ley, ya trascritas, y, además, porque



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ninguna de las personas que declararon en el proceso contencioso administrativo las reconoció, por no habérseles puesto de presentes al momento de rendir su testimonio, y tampoco a través de inspección judicial

se estableció que ellas sí corresponden al río Pepé" (Subraya fuera del texto) (Sentencia de 28 de julio de 2005. Expediente 14.998. Consejera Ponente: Dra. María Elena Giraldo)

Igual postura asumió la Alta Corporación en Sentencia 1996-03099 de junio 8 de 2011 al señalar lo siguiente:

"Previo al análisis del fondo de la controversia, es menester advertir que la parte actora, con el fin de acreditar los hechos, aportó al proceso unas fotografías (fls. 91 a 96, cdno. 1), las cuales no serán valorados en esta instancia, toda vez que carecen de mérito probatorio, en la medida en que si bien fueron expuestas a algunos testigos (fis. 78 a 82, cdno. 3), estos resaltan en sus declaraciones que las imágenes corresponden a la calle en la cual se presentó el accidente, sin embargo, desconocen la época en que fueron tomadas o documentadas, de modo que no es posible definir con ellas la situación temporal de ocurrencia del suceso que representan"

RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PROVENIENTES DE TERCEROS

El artículo 262 del Código General del Proceso faculta a las partes dentro de un proceso para que, si a bien lo tienen, soliciten la ratificación de los documentos provenientes de terceros aportados por la parte contraria. Vale la pena resaltar que esta disposición establece una clara consecuencia jurídica ante el evento en que una parte solicite la ratificación del documento y ello no se lleve a cabo:

"(...) Artículo 262. Documentos declarativos emanados de terceros. Los documentos privados de contenido declarativo emanados de terceros se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite su ratificación (...)"

Entonces, cabe resaltar que el Juez sólo podrá apreciar probatoriamente los documentos cuya ratificación se solicita si efectivamente ésta se hace, como lo consagra el citado artículo. En tal virtud, solicito al Despacho que no se les conceda valor alguno demostrativo a los documentos provenientes de terceros aportados por la parte demandante mientras ésta no solicite y obtenga su ratificación, y entre ellos, de manera enunciativa enumero los siguientes:

- Álbum fotográfico del lugar de los hechos elaborado por Nataly Giraldo Sánchez
- Informe Policial de Accidente de Tránsito No. A001398732. Elaborado por el Agente Migdonio Mosquera Lozano C.C 16.790.763 – Placa: 581 – Secretaría de Movilidad

Las anteriores ratificaciones, se solicitan por lo expuesto en la contestación de la presente demanda, no obstante, a manera enunciativa se indica que respecto del Informe Policial de Accidente de Tránsito, es necesaria la ratificación, a fin de determinar las circunstancias de suscripción de tal escrito, tales como la hora, el conocimiento del agente de tránsito respecto de las circunstancias del mismo, de igual forma, respecto al álbum fotográfico se hace necesario conocer las supuestas circunstancias de tiempo, modo y lugar.

DESCONOCIMIENTO DE DOCUMENTOS

En caso de que el despacho considere que es el desconocimiento el medio probatorio para controvertir los documentos de los que se solicitó la ratificación, comedidamente solicito que se tramite esto a través de esta prueba consagrada en el artículo 272 del Código General



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

del Proceso, en el que se faculta a las partes para desconocer los documentos que no fueron suscritos por estas.

OPOSICION A LAS PRUEBAS PERICIALES SOLICITADAS POR LA PARTE DEMANDANTE

Me opongo a que se decrete las pruebas periciales solicitadas por los demandantes, pues ellos debieron cumplir con la carga que les impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con lo dispuesto en el Art. 166 del CPACA.

Los demandantes tenían la obligación de anexar a su libelo, los dictámenes periciales necesarios, para probar su derecho y no lo hicieron y por ende la prueba pericial solicitada debe ser negada por el H. Juez, pues el Despacho no puede subsanar semejante falencia.

PRUEBAS, PERSONERIA, LLAMAMIENTO Y ANEXOS

PRUEBAS

Solicito se tengan como pruebas las presentadas por la parte actora, con la posibilidad de ser controvertidas en el transcurso del proceso.

En aras a un efectivo derecho a la defensa, solicito comedidamente se me autorice contrainterrogar a los testigos de la parte demandante en la audiencia de recepción de los testimonios que llegaren a ser decretados por su Despacho, tal como está previsto en el Código General del Proceso en sus Artículos 226 y 228 que versan sobre la prueba pericial y su respectiva contradicción. Atendiendo lo anterior, le solicito comedidamente se sirva citar a los autores de estas pruebas presentadas por la parte demandante a efectos de hacer la contradicción respectiva.

DOCUMENTAL APORTADA EN ESTA CONTESTACION

Allego imágenes en archivo PDF extraídas de Google Maps (Plataforma de dominio público) para ilustrar de mejor manera el lugar donde indica el actor tuvieron lugar los hechos. Avenida Tercera Norte con Calle 55 Sentido Sur – Norte de la Vía.

PERSONERÍA

Solicito al Honorable Juez Segundo (02) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Santiago de Cali, reconocirme personería para actuar dentro del proceso, conforme al poder que se me ha conferido y que adjunto a este escrito, con sus respectivos anexos.

LLAMAMIENTO EN GARANTIA

En escrito separado con el fin de que se hagan parte en el presente proceso, me permito formular Llamamiento en Garantía a las Compañías Aseguradoras: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A, MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A Y SBS SEGUROS COLOMBIA S.A, quienes figuran en la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

420- 80-994000000202, expedida por la Compañía de Seguros, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA. También se aportan Certificados de existencia y Representación Legal expedidos por la Cámara de Comercio de Bogotá.

ANEXOS

Los siguientes documentos:

- 1) Poder especial a mi conferido por la jefe Jurídica del distrito Especial de Santiago de Cali con sus respectivos anexos.
- 2) Escrito de Llamamiento en Garantía.
- 3) Copia Póliza No. 420- 80-994000000202, expedida por la Compañía de Seguros, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA. El quince (15) de septiembre de 2021 con vigencia desde el 30 de agosto de 2021 hasta el 28 de febrero de 2022.
- 4) Certificados de Existencia y Representación legal expedidos por Cámara de Comercio de Bogotá de las compañías de Seguros: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A, SBS SEGUROS COLOMBIA S.A, MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A, donde figuran los respectivos datos para efectos de notificaciones.

NOTIFICACIONES – CANALES DIGITALES DE COMUNICACION

EL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, recibirá notificaciones en el correo electrónico: notificacionesjudiciales@cali.gov.co

El suscrito como apoderado del DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, en el Correo electrónico: diegofernandopaz@hotmail.com

Las compañías objeto del llamado y sus Representantes Legales, las recibirán en las direcciones indicadas en los Certificados de Existencia y Representación legal expedidos por Cámara de Comercio.

Atentamente,

DIEGO FERNANDO PAZ LENIS
C.C 16.931.736 de Cali -Valle - T.P 154257 del C.S.J
Apoderado Distrito Especial de Santiago de Cali
Canales de Comunicación: diegofernandopaz@hotmail.com
311 385 1932

Link Imagen: <https://www.google.com/maps/@3.4855616,-76.5122862,3a,75y,270h,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1sGbnvJNLxjZlwsqENx4gIVg!2e0!7i13312!8i6656>

